


IMPUGNACIÓN FALLO DE TUTELA DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - RAD: 20001-3105-002-2023-00294-00

Notificaciones Judiciales Corpocesar <notificacionesjudiciales@corpocesar.gov.co>

Jue 14/09/2023 15:18

Para: Juzgado 02 Laboral Circuito - Cesar - Valledupar <j02lcvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 2 archivos adjuntos (510 KB)

GBZ. IMPUG. A-TUTELA - MARIA BEATRIZ.pdf; T - 2023-00059-00 Julio Alberto de la Hoz Fontalvo Vs Corpocesar y otros - Improcedente.pdf;

Asunto: Impugnación fallo de tutela

Referencia: 20001310500220230029400

Despacho: Juzgado Segundo Laboral Del Circuito De Valledupar

Accionante: Maria Beatriz Torres Díaz

Accionado: CORPOCESAR, Departamento del Cesar, Agencia Nacional de Tierras -INCODER-, Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes de Valledupar

GILBERTO AUGUSTO BLANCO ZUÑIGA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., identificado como parece al pie de mi firma, actuando en calidad de apoderado de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR (en adelante CORPOCESAR), de acuerdo con lo establecido en el poder adjunto; encontrándome dentro de la oportunidad correspondiente, respetuosamente me dirijo ante usted con el fin de impugnar el fallo del 11 de septiembre de 2023, proferido dentro de la acción de tutela con radicado No. 20001310500220230029400, en los siguientes términos:

SE ADJUNTA IMPUGNACIÓN Y EL RESPECTIVO ANEXO.



BLANCO & DEGIOVANNI

Abogados y Consultores

Bogotá D.C., 13 de septiembre de 2023

Señores

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR

E.S.D.

Presente

Asunto: Impugnación fallo de tutela

Referencia: 20001310500220230029400

Despacho: Juzgado Segundo Laboral Del Circuito De Valledupar

Accionante: Maria Beatriz Torres Díaz

Accionado: CORPOCESAR, Departamento del Cesar, Agencia Nacional de Tierras -INCODER-, Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes de Valledupar

GILBERTO AUGUSTO BLANCO ZUÑIGA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., identificado como parece al pie de mi firma, actuando en calidad de apoderado de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR (en adelante CORPOCESAR), de acuerdo con lo establecido en el poder adjunto; encontrándome dentro de la oportunidad correspondiente, respetuosamente me dirijo ante usted con el fin de impugnar el fallo del 11 de septiembre de 2023, proferido dentro de la acción de tutela con radicado No. 20001310500220230029400, en los siguientes términos:

I. DE LA ACCIÓN DE TUTELA

La señora MARIA BEATRIZ TORRES DÍAZ en calidad de presidente y representante legal del consejo comunitario Enuemía Margarita Torres González instauró una acción de tutela en contra de la Corporación Autónoma Regional del Cesar -CORPOCESAR- y la Gobernación del Cesar por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, autodeterminación de la etnia de





comunidades negras, afrocolombianas, raizal y palenquera, a la igualdad, a elegir y ser elegido, y al acceso a la representación pública en conexidad con el principio de prevalencia del derecho sustancial.

Para fundamentar la presunta vulneración, la accionante afirmó que, el 02 de agosto de 2023, la Corporación Autónoma Regional del Cesar -CORPOCESAR- abrió una convocatoria pública, dirigida a todos los consejos comunitarios de las comunidades negras localizados en el Departamento del Cesar, para participar en la elección del representante principal y suplente de las comunidades negras ante el Consejo Directivo de CORPOCESAR para el periodo – 2023 – 2027.

Bajo este escenario, explicó que, pudo participar en el último proceso de elección del representante principal y suplente de las comunidades negras ante la mesa directiva de CORPOCESAR gracias a una acción de tutela que interpuso en septiembre de 2019 y que el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes de Valledupar resolvió de manera favorable al tutelar los derechos fundamentales a la igualdad, participación, debido proceso y autonomía y autodeterminación de la etnia de comunidades negras, afrocolombiana raizal y palenquera, y ordenar al Director de CORPOCESAR a (i) decretar la nulidad de toda actuación al interior del proceso de convocatoria pública, para elegir un representante principal y un representante suplente, ante el Consejo Directivo de CORPOCESAR, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023 y a (ii) realizar una nueva convocatoria pública garantizando la participación de los Consejos Comunitarios que cumplieran los requisitos.

Aseguró que en el más reciente proceso de selección se hace exigible aportar todos los requisitos consagrados en el artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076 de 26 de mayo del 2015, en especial el relacionado con la *“Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción.”*



En este orden de ideas, citó sentencias proferidas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en donde se señalaba que la participación de las comunidades negras no podía supeditarse a que contaran con un título colectivo adjudicado por el INCODER ni a ningún criterio que limitara el ejercicio de sus derechos fundamentales como titulares de derechos étnicos.

De esta manera, concluyó indicando que, en el departamento del Cesar, ningún consejo comunitario tiene territorio colectivos, pues de 100 consejos comunitarios solo 12 tienen certificación del Ministerio, lo cual a su juicio supone que solo una minoría representaría o tendría la posibilidad de tener voz y voto al interior del Consejo Directivo de CORPOCESAR.

II. DE LA CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA

La Corporación Autónoma Regional del Cesar -CORPOCESAR- dentro de la oportunidad procesal correspondiente aseguró que en el presente caso no se logró acreditar el cumplimiento del requisito de subsidiariedad para la procedencia de la acción de tutela, pues la accionante se pudo manifestar dentro del trámite administrativo respectivo, o acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para reclamar la efectividad de los derechos constitucionales y legales que considerara vulnerados, pudiendo incluso solicitar medidas cautelares y utilizar los demás mecanismos procesales orientados a la satisfacción de sus intereses.

Asimismo, indicó que no se logró demostrar la existencia de un perjuicio irremediable, pues, de acuerdo con los hechos y pretensiones expuestas en el escrito de interposición de la acción de tutela, aquellos no comportaban un impacto que lograra afectar inminentemente y con carácter grave los derechos fundamentales, requiriendo de la interposición de medidas impostergables que neutralizaran la situación.



Reiteró que la convocatoria de CORPOCESAR en el marco de la convocatoria pública dirigida a todos los consejos comunitarios de las comunidades negras localizadas en el departamento del Cesar, para participar en la elección del representante principal y suplente de las comunidades negras a que se refiere el artículo 56 de la ley 70 de 1993, ante el Consejo Directivo de CORPOCESAR, para el periodo 2023 – 2027 había sido realizada de conformidad con los principios de mérito, libre concurrencia e igualdad para el ingreso, publicidad, transparencia en la gestión de los procesos, especialización de los órganos técnicos ejecutores, garantía de imparcialidad, confiabilidad, eficacia y eficiencia, sin restringir en ningún momento la participación de las comunidades.

En este sentido, señaló que, para verificar la capacidad y competencias de los aspirantes a acceder a los empleos públicos de carrera en la Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR- era necesario atender lo contemplado en el artículo 2.2.8.5.1.2.5 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 y en efecto, *exigir la “Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción.”*

Igualmente, mencionó que, en aras de garantizar y propender por un adecuado ejercicio de inclusión y participación de las comunidades negras, la Corporación Autónoma Regional del Cesar –CORPOCESAR- cuenta con la colaboración del señor JOSE ARMANDO MENDOZA SARMIENTO, Directivo de la Comisión Consultiva de Alto Nivel de la Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, quien coordina las actuaciones con la autoridad ambiental y quien a través de un derecho de petición solicitó *“convocar únicamente a los consejos comunitarios que cumplan estrictamente con los requisitos establecidos en el artículo 2 del Decreto 1523 de 2003”*¹.

¹ “Artículo 2. Requisitos. Los Consejos Comunitarios que aspiren a participar en la elección del representante y suplente, ante el Consejo Directivo, allegarán a la Corporación Autónoma Regional respectiva, con anterioridad mínima de quince (15) días a la fecha de la elección, los siguientes documentos: a) Certificación expedida por el alcalde municipal correspondiente, en la que conste la



En virtud de lo anterior, manifestó que, los participantes en la convocatoria pública en mención debían acreditar los requisitos determinados en la misma, pues no exigírselos conllevaría eventualmente a violar de manera directa una disposición normativa y a incurrir en una vía de hecho administrativa.

Por último, indicó que varias personas habían presentado acciones de tutela por los mismos hechos, razón por la cual se encontraban ante un escenario de tutelas masivas, pues perseguían la protección de los mismos derechos fundamentales presuntamente vulnerados y fundamentaban la presunta amenaza y/o vulneración en la convocatoria pública del 02 de agosto de 2023 realizada por la Corporación Autónoma Regional del Cesar -CORPOCESAR-.

III. DEL FALLO IMPUGNADO

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Valledupar mediante fallo del 11 de septiembre de 2023 decidió amparar los derechos fundamentales invocados por la señora MARIA BEATRIZ TORRES DÍAZ y en consecuencia ordenó a la Corporación Autónoma Regional del Cesar -CORPOCESAR- obviar el requisito *“Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción”*, dejar sin efecto la convocatoria pública del día 02 de agosto de 2023 y en su lugar, realizar una nueva.

Para arribar a esta decisión, la juez indicó que la accionante no disponía de otro medio legal para la protección de su derecho fundamental a elegir y ser elegida, pues no existía una forma de controvertir la interpretación, de cara a que pudiera acceder a su

ubicación del Consejo Comunitario, la inscripción de la Junta y de su representante legal; b) Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción; c) Allegar original o copia del documento en el cual conste la designación del miembro de la comunidad postulado como candidato.”



elección en el municipio que aspiraba, dada la premura de la convocatoria y de los términos de las acciones administrativas ordinarias.

En este orden de ideas, advirtió que el requisito exigido resultaba ilegal e inconstitucional, pues coartaba el derecho fundamental contenido en el artículo 40 de la Constitución Política (derecho a elegir y ser elegido), al considerar que según la Corte Constitucional y el Consejo de Estado no era posible exigir un título colectivo para el ejercicio de los derechos fundamentales de participación de los consejos comunitarios.

IV. CONSIDERACIONES

Teniendo en cuenta la actuación procesal de las partes al interior de la presente acción de tutela, es menester, a efectos de ejercer de esta manera el derecho de defensa y contradicción de la Corporación Autónoma Regional del Cesar -CORPOCESAR- hacer referencia principalmente a cuatro situaciones a saber: (i) del carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) de la improcedencia de la acción de tutela cuando no existe un perjuicio irremediable; (iii) de la sujeción a los dictados legales por parte de la Corporación Autónoma Regional del Cesar -CORPOCESAR- ; (iv) del reparto masivo de acciones de tutela y la existencia de una decisión previa y, (v) unas últimas apuntaciones sobre la excepción de inconstitucionalidad de la que echó mano el juzgado de primer grado.

⇒ Del carácter subsidiario de la acción de tutela

La Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 86 la acción de tutela como un instrumento de protección de carácter general a disposición de toda persona contra la violación de sus derechos fundamentales, mediante acciones u omisiones de cualquier autoridad pública y contra particulares, este último de manera excepcional.

Con fundamento en lo anterior, vemos como esta acción no está condicionada más que al derecho fundamental cuyo amparo se



persigue y por el hecho de que el accionante no disponga de otro medio de defensa, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Sumado a lo indicado, la Honorable Corte Constitucional ha señalado, reiteradamente, que dos de las características esenciales de la acción de tutela son la subsidiariedad y la inmediatez, así:

“...la primera por cuanto tan solo resulta procedente instaurar la acción en subsidio o a falta de instrumento constitucional o legal diferente, susceptible de ser alegado ante los jueces, esto es, cuando el afectado no disponga de otro medio judicial para su defensa, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable (art. 86, inciso 3°, de la Constitución); la segunda puesto que la acción de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza. Luego no es propio de la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a remplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el ordenamiento sustantivo en cuanto a fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces...”

En otros términos, la acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que impliquen la trasgresión o amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho... así, pues, que la tutela no es factible de ser elegida según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece la acción ordinaria”.²

(Negrilla y cursiva fuera de texto)

En este mismo sentido, en lo que corresponde a la subsidiariedad de la acción de tutela, el mencionado órgano colegiado, ha indicado:

“...Subsidiariedad: A la luz del artículo 86 de la Constitución y del artículo 6.1 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela tiene un

² Sentencia C-543 de 1992 (Exp. Expedientes D-056 y D-092), M.P. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO.



carácter residual y subsidiario. Por esta razón, solo procede como mecanismo de protección definitivo (i) cuando el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial; o (ii) cuando existiendo ese medio carezca de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto³. Además, procederá como mecanismo transitorio cuando se interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable en un derecho fundamental. También, la procedencia como medio transitorio exige acreditar: (i) la temporalidad, vista como la afectación inminente; (ii) la urgencia de las medidas en la protección del derecho amenazado; (iii) la gravedad en el grado de afectación del derecho; y (iv) el carácter impostergable de las medidas para garantizar el amparo del derecho...”⁴

Igualmente, sobre el carácter subsidiario de la acción de tutela, el Alto Tribunal ha señalado que *“permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos”*.⁵ En este orden de ideas, es ese reconocimiento el que obliga a los asociados a incoar los recursos jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que estimen lesiva de sus derechos.

Aunado a lo anterior, en lo referente a la no procedencia de la tutela cuando se cuenta con otros medios de protección, la Corte Constitucional ha expuesto:

“...la acción de tutela no ha sido consagrada para provocar la iniciación de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opción de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el propósito claro y definido, estricto y específico, que el propio artículo 86 de

³ Corte Constitucional, sentencia T-040 de 2016 (expediente T-5.168.539), M.P. ALEJANDRO LINARES CANTILLO

⁴ Sentencia T-296/22 (Expediente T-8.104.419), M.P. ALEJANDRO LINARES CANTILLO

⁵ Sentencia T-603 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado); Sentencia T-580 de 2006 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa)



la Constitución indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce...”⁶

(Negrilla y cursiva fuera de texto).

En consecuencia, en el caso concreto no se logra cumplir con el requisito de subsidiaridad pues como es bien sabido, el ordenamiento jurídico pone a disposición de los ciudadanos diversos mecanismos para la defensa de sus derechos, siendo uno de ellos la acción de tutela, sin embargo, la misma se condiciona al hecho de que el accionante no disponga de otro medio de defensa.

De esta manera, se observa que el medio de defensa principal e idóneo al cual se considera pertinente acudir los accionantes en el caso concreto es, o bien manifestarse dentro del trámite administrativo respectivo, o acudiendo a la jurisdicción Contencioso Administrativa. Al amparo de los medios antes indicados, la accionante puede reclamar la efectividad de los derechos constitucionales y legales que considere vulnerados, teniendo incluso, dentro del trámite jurisdiccional respectivo, la posibilidad de solicitar medidas cautelares y utilizar los demás mecanismos procesales orientados a la satisfacción de sus intereses.

⇒ *De la improcedencia de la acción de tutela cuando no existe un perjuicio irremediable*

La Corte Constitucional en distintas oportunidades ha indicado que, es posible acudir excepcionalmente a la acción de tutela cuando a pesar de existir un mecanismo idóneo, el mismo no goza de la suficiente efectividad, o cuando se trata de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

En este sentido, la jurisprudencia de esta Corte ha definido el **perjuicio irremediable** como “*el riesgo de consumación de un daño o afectación cierta, negativa, jurídica o fáctica, a los derechos*

⁶ Sentencia T-882/12 (expediente T-3520653), LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ



fundamentales, que debe ser invocada por el juez constitucional, dada la alta probabilidad de su ocurrencia”. Bajo esta línea, ha indicado que *“si la Constitución Política no consagrare el carácter subsidiario de la acción de tutela, se vaciarían de contenido lo mecanismos de defensa judicial dispuestos por el ordenamiento jurídico”*.

Ahora bien, para determinar la existencia de un perjuicio irremediable, que pueda superar el requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional ha establecido que (i) el perjuicio debe ser inminente, es decir, no basta con que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) el perjuicio que se cause sea grave, lo que implicaría, en consecuencia, un daño de gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) las medidas que se requieran para evitar la configuración sean urgentes; y (iv) la acción es impostergable, es decir, en caso de aplazarse la misma sea ineficaz por inoportuna.⁷

En este punto, y de cara a lo referente al perjuicio irremediable, es pertinente indicar que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-318 de 2017, con ponencia del Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, indicó:

“Frente al particular, esta Corporación, en Sentencia T-494 de 2010, señaló:

“La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que únicamente se considerará que un perjuicio es irremediable cuando, de conformidad con las circunstancias del caso particular, sea: (a) cierto e inminente—esto es, que no se deba a meras conjeturas o especulaciones, sino a una apreciación razonable de hechos ciertos-, (b) grave, desde el punto de vista del bien o interés jurídico que lesionaría, y de la importancia de dicho bien o interés para el afectado, y (c) de urgente atención, en el sentido de que sea necesaria e inaplazable su prevención o mitigación para evitar que se consuma un daño antijurídico en forma irreparable.”

⁷ Corte Constitucional. Sentencia T-003/22.



Conforme a estos criterios, la Corte ha conceptualizado el perjuicio irremediable, así:

"(...) De acuerdo con la doctrina constitucional pertinente, un perjuicio irremediable se configura cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo neutralicen (...).

En síntesis, la acción constitucional no puede desplazar al juez ordinario y solo subsidiariamente, en eventos excepcionales definidos por la jurisprudencia, aquella puede invocarse para solicitar una protección transitoria, o una protección definitiva. Cuando se invoca el perjuicio irremediable, el peticionario debe acreditarlo o aportar mínimos elementos de juicio que le permitan al juez constitucional comprobar la existencia de este elemento".

Con fundamento en lo anterior, se encuentra plenamente demostrado que, en relación con la situación aducida por la accionante, no se logró demostrar la existencia de un perjuicio irremediable, pues, de acuerdo con los hechos y pretensiones expuestas en el escrito de interposición de acción de tutela, se considera que las mismas no comportan un impacto que logren afectar inminentemente y con carácter grave sus derechos, requiriendo de la interposición de medidas impostergables que neutralicen la situación.

Aunado a lo anterior, en el caso objeto de pronunciamiento, se considera que no es posible que se dé lugar a la aplicación del artículo 8 del Decreto 2591 de 1991, pues como ya se indicó en la situación concreta no se está ante la presencia de un perjuicio irremediable.

Así las cosas, se evidencia claramente que en el caso objeto de pronunciamiento, la accionante no aportó ningún tipo de material probatorio que permita establecer con certeza y claridad la existencia de un perjuicio irremediable.

⇒ *De la sujeción a los dictados legales por parte de la Corporación Autónoma Regional del Cesar -CORPOCESAR-*



La actuación de la Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR- en el marco de la Convocatoria Pública dirigida a todos los consejos comunitarios de las comunidades negras localizadas en el departamento del Cesar, para participar en la elección del representante principal y suplente de las comunidades negras a que se refiere el artículo 56 de la ley 70 de 1993, ante el Consejo Directivo de CORPOCESAR, para el periodo 2023 – 2027 fue realizada con base en los principios de mérito, libre concurrencia e igualdad para el ingreso, publicidad, transparencia en la gestión de los procesos, especialización de los órganos técnicos ejecutores, garantía de imparcialidad, confiabilidad, eficacia y eficiencia.

En ningún momento se ha restringido la participación en la convocatoria pública del 02 de agosto de 2023, pues al exigir el requisito contemplado en el artículo 2.2.8.5.1.2.5 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 la autoridad ambiental únicamente buscaba cerciorarse de que aquellos que participaran en la convocatoria acreditaran los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico.

Además, en aras de garantizar y propender por un adecuado ejercicio de inclusión y participación de las comunidades negras al interior de la Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR-, se cuenta con la colaboración del Director de la Comisión Consultiva de Alto Nivel de la Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, el señor JOSE ARMANDO MENDOZA SARMIENTO, quien coordina con la entidad las instancias de diálogo y discusión de las comunidades negras.

De hecho, el Director de la Comisión Consultiva de Alto Nivel de la Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenquera en derecho de petición allegado el 12 de julio de 2023 le solicitó a CORPOCESAR *“convocar únicamente a los consejos comunitarios*



que cumplan estrictamente con los requisitos establecidos en el artículo 2 del Decreto 1523 de 2003”⁸.

Finalmente, se considera prudente poner de presente que de no exigirse el requisito reprochado por la accionante en el marco de la convocatoria pública, CORPOCESAR no solamente estaría incurriendo en una violación directa de una disposición normativa, sino que además se encontraría incurso en una vía de hecho administrativa, pues se encontraría tomando una decisión que, en términos de la Sentencia T-682 de 2015⁹, “(...)lo hace de forma arbitraria y con fundamento en su única voluntad, actuando en franca y absoluta desconexión con el ordenamiento jurídico.”

⇒ Del reparto masivo de acciones de tutela y la existencia de una decisión previa

Con base en los mismos hechos y pretensiones invocadas por la accionante, se han presentado diferentes acciones de tutela, una por el señor HERMES LEONIDAS MOLINA OSORIO en calidad de representante legal del Consejo Comunitario Caño Candela, a la cual le está dando trámite el Juzgado Promiscuo Municipal de Becerril – Cesar; otra por el señor JAIME LUIS CUADRO a la cual le está dando trámite el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Chiriguana – Cesar y; una última por el señor JULIO ALBERTO DE LA HOZ FONTALVO a la cual le está dando trámite el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento De Chiriguana – Cesar.

Las acciones de tutela mencionadas (i) persiguen la protección de los mismos derechos fundamentales presuntamente vulnerados

⁸ “Artículo 2. Requisitos. Los Consejos Comunitarios que aspiren a participar en la elección del representante y suplente, ante el Consejo Directivo, allegarán a la Corporación Autónoma Regional respectiva, con anterioridad mínima de quince (15) días a la fecha de la elección, los siguientes documentos: a) Certificación expedida por el alcalde municipal correspondiente, en la que conste la ubicación del Consejo Comunitario, la inscripción de la Junta y de su representante legal; b) Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción; c) Allegar original o copia del documento en el cual conste la designación del miembro de la comunidad postulado como candidato.”

⁹ Sentencia T-682/15 (expediente T- 4.412.740), JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB.



que, en este caso corresponden al debido proceso, a la participación, a la igualdad, a elegir y ser elegido, a la autodeterminación de la etnia de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y demás y (ii) fundamentan la presunta amenaza o vulneración de derechos por una sola y misma acción de una autoridad pública, la cual, en lo que nos atañe, fue la convocatoria pública del 02 de agosto de 2023 realizada por la Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR- para la elección del representante principal y suplente de las comunidades negras ante el Consejo Directivo de la Corporación.

Ahora bien, precisamente en una de esas acciones de tutela, concretamente en la del señor JULIO ALBERTO DE LA HOZ FONTALVO, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Chiriguaná declaró como improcedente el amparo de los derechos fundamentales.

Así, mediante fallo proferido el 31 de agosto de 2023, el Juez Primero Penal del Circuito de Chiriguaná señaló que, si la parte accionante consideraba que la exigencia del literal b), del artículo 2.2.8.5.1.2, del Decreto 1076 de 2015, para que los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras localizados en el departamento del Cesar pudieran participar en la convocatoria pública de CORPOCESAR, aplicada por esa entidad el pasado 2 de agosto de 2023, referida a la elección de un (1) representante principal y suplente ante el consejo directivo de CORPOCESAR para el periodo 2024 - 2027, vulneraba sus derechos debía acudir ante la jurisdicción contencioso-administrativa, incluso, pudiendo solicitar como medida cautelar la suspensión provisional del acto administrativo mediante el cual se hizo la convocatoria.

A su juicio resultaba improcedente que el señor JULIO ALBERTO DE LA HOZ FONTALVO acudiera ante la jurisdicción constitucional con el fin de que se dejara sin efecto un acto administrativo de carácter general y se ordenara a un ente administrativo autónomo como lo es CORPOCESAR a realizar una nueva convocatoria con el fin de



elegir representante principal y suplente de las comunidades negras ante el Consejo Directivo de esa Corporación donde se incluyera a todos los Consejos Comunitarios, sin importar que tuvieran o no la certificación expedida por la Agencia Nacional de Tierras en trámite o adjudicada.

Lo anterior, por cuanto, el legislador había instituido mecanismos a partir de los cuales se generaban alternativas judiciales de reclamación, que eran las llamadas a utilizarse preferentemente, salvo que se estuviera frente a la posible configuración de un perjuicio irremediable, que de alguna manera justificara la intervención de la jurisdicción constitucional.

De esta manera indicó que, el accionante no había demostrado que existiera una amenaza a los derechos fundamentales invocados, y tampoco que los requisitos establecidos en la convocatoria pública del 02 de agosto de 2023 fueran contrarios a lo exigido por la normatividad vigente y/o constituyeran una vía de hecho.

Igualmente, el Despacho observó que, la convocatoria pública efectuada por CORPOCESAR el 02 de agosto de 2023 había sido dirigida a todas las Comunidades Negras domiciliadas en todo el territorio del departamento del Cesar para que participaran en la elección de un (1) representante miembro principal y suplente ante el Consejo Directivo de dicha Corporación para el periodo 2024 - 2017 y en la misma se había informado a los Consejos Comunitarios que aspirarían a participar que era necesario allegar con anterioridad de 15 días a la fecha establecida para la elección los requisitos previstos en el artículo 2.2.8.5.1.2 del decreto 1076 de 2015 incluyendo el del literal b) que se refiere a la *certificación expedida por el INCODER, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados* o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción, otorgándoles como plazo para la presentación de los documentos los días hábiles comprendidos entre el 2 de agosto de 2023 hasta el 25 de agosto de 2023.



Pese a lo anterior, advirtió que, el accionante no intentó obtener ante la Agencia Nacional de Tierras – ANT la certificación que acreditara que se encontraba en trámite la adjudicación a la comunidad negra, razón por la cual claramente no agotó todos los mecanismos jurídicos para lograr la protección de los derechos fundamentales invocados en la acción de tutela.

Ahora bien, dicho lo anterior, es pertinente indicar que nos encontramos en un escenario que transgrede el principio de seguridad jurídica, entendiendo esta como sinónimo de certeza y legalidad, que para el caso que nos ocupa supone particularmente que cuando una situación hace tránsito a cosa juzgada, la autoridad que la profirió no puede pronunciarse en el futuro sobre lo que decidió.

En el presente caso, si bien la autoridad que decidió declarar como improcedente el amparo de los derechos fundamentales del señor JULIO ALBERTO DE LA HOZ FONTALVO a través de la acción de tutela es diferente a la que ahora decide tutelar los derechos fundamentales de la señora MARIA BEATRIZ TORRES DÍAZ, ambos fallos judiciales hacen referencia a la misma situación fáctica: la convocatoria realizada por CORPOCESAR el 02 de agosto de 2023 para la elección del representante principal y suplente de las comunidades negras a que se refiere el artículo 56 de la ley 70 de 1993, ante el Consejo Directivo de la Corporación para el periodo – 2023 – 2027.

En este orden de ideas, el hecho de que existan dos decisiones judiciales, una que declara como improcedente el amparo de los derechos fundamentales y considera que no se configura un perjuicio irremediable que amerite la intervención de la jurisdicción constitucional y; otra que acceda al amparo, ordene omitir la exigencia del requisito contemplado en el artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076 de 26 de mayo del 2015 y dejar sin efecto la convocatoria pública para realizar una nueva, genera un panorama de inseguridad jurídica para la Corporación Autónoma Regional del Cesar -CORPOCESAR-, pues la autoridad ambiental no conoce



realmente como y cómo proceder, máxime cuando se trata de los mismos supuestos fácticos.

Como sostuvo la Corte Constitucional, esta clase de sentencias, denominadas “*sentencias contradictorias*”, generan indefinición y representan una circunstancia grave para las personas que buscan seguridad jurídica, pues en éstas las autoridades judiciales le otorgan un trato desigual a aquellas situaciones que ameritarían un trato similar, favoreciendo la contradicción o el desconocimiento del derecho a la igualdad de los asociados¹⁰.

⇒ Apuntaciones finales sobre la excepción de inconstitucionalidad de la que echó mano el juzgado de primer grado.

Previo a acometer el instituto en precedencia que en últimas fue el que tuvo en consideración el a quo, y a pesar de que ya se adujo una razón de improcedencia: la subsidiariedad, también es lo cierto que merced a la previsión del numeral 5° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, el recurso de amparo se torna improcedente cuando de controvertir actos generales y abstractos se trata, cual ocurre en los autos.

Mas, con abstracción de esa otra razón para desestimar la acción, nótese que, en últimas, el juzgado de primera instancia inaplicó unas normas legales, al abrigo de dar cabida a disposiciones superiores.

El juzgado lo que hace, pues, es abrirle paso a la llamada excepción de inconstitucionalidad, pero extrañamente la figura en comentario, muchas veces exótica, se encuentra ayuda y huérfana de justificación alguna o suficiente en la sentencia que se impugna.

En adición, el mismo Consejo de Estado, en sentencia de 1° de Marzo de 1980 expresó: “(...) *La estabilidad del sistema que nos rige parte de la presunción de que toda ley se ajusta a las normas constitucionales mientras no haya sido declarada inexecutable*”.

¹⁰ Corte Constitucional. Sentencia T-698/14.



A este argumento se suma el de que, con la excepción de inconstitucionalidad, podría incluso averiarse el principio de la igualdad de todos ante la ley, dado que un ciudadano puede, con fundamento en una determinada norma, obtener la satisfacción de un interés particular, mientras que otro, apoyado en una misma disposición puede eventualmente ser tratado diferentemente por el funcionario encargado de aplicarla, como ya viene ocurriendo en este asunto donde otras personas arguyendo similares situaciones han obtenido sentencias desfavorables por parte de la jurisdicción.

V. PRETENSIÓN

Con fundamento en lo expuesto, respetuosamente se solicita REVOCAR el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Valledupar el 11 de septiembre de 2023 y, en su lugar declarar como improcedente el amparo del derecho fundamental al debido proceso, participación, a la igualdad, a elegir y ser elegido, alegado por parte de la accionante, en razón a que las disposiciones tomadas y actuaciones ejecutadas por CORPOCESAR que son materia de reproche, se circunscriben a: (i) decisiones que se encuentran debidamente soportadas en las normas aplicables al caso; (ii) no comportan una vulneración a derecho fundamental alguno y; (iii) no causan un perjuicio irremediable que merezca ser objeto de protección por medio del presente amparo constitucional.

VI. ANEXOS

Para los fines pertinentes, se aportan los siguientes documentos:

- a. Fallo proferido el 31 de agosto de 2023 por el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento De Chiriguaná – Cesar dentro de acción de la tutela instaurada por el señor JULIO ALBERTO DE LA HOZ FONTALVO en contra de CORPOCESAR.



BLANCO & DEGIOVANNI

Abogados y Consultores

VII. NOTIFICACIONES

La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR, recibirá notificaciones a través del correo electrónico notificacionesjudiciales@corpocesar.gov.co

El suscrito las recibirá en la ciudad la ciudad de Bogotá, en la Calle 94ª No 11ª - 39 Edificio Consorcio Inmobiliario Oficina 308, Tel. 315-7599041. De igual forma podrá ser notificado en las siguientes direcciones de correo electrónico: gilbertoblancoz@yahoo.com, gblanco@bdabogados.com.co, sarai232009@hotmail.com y ecorrea533@yahoo.com

Del señor Juez,

Atentamente,

GILBERTO AUGUSTO BLANCO ZÚÑIGA

C.C. No. 7.144.767

T.P. 113.284 del C. S de la J.

Apoderado – CORPOCESAR





DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ

TIPO DE PROCESO	Acción de Tutela – Primera Instancia
RADICADO No.	20178-31-04001-2023-00059-00
ACCIONANTE (S)	JULIO ALBERTO DE LA HOZ FONTALVO
ACCIONADO (S)	Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR” y Municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar
VINCULADO (S)	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Tierras

Chiriguaná, treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

1. – OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO

Procede el Despacho a decidir la tutela presentada por **JULIO ALBERTO DE LA HOZ FONTALVO en representación legal de Consejo Comunitario San Isidro Labrador del Municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar¹** contra Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR” y Municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, ante la presunta vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, autodeterminación de la etnia de comunidades negras, afrocolombianas, raizal y palenquera, a la igualdad, a elegir y ser elegido y al acceso a representación pública en conexidad con el principio de prevalencia del derecho sustancial.

2. – HECHOS Y PRETENSIÓN

Expuso que pudo participar en el último proceso de elección del representante principal y suplente de las comunidades negras ante la mesa directiva de CORPOCESAR, por lo que se garantizó sus derechos a elegir y ser elegidos, mediante la sentencia de tutela de 24 de septiembre de 2019² proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes de

¹ Folio 41 del PDF 02DemandaTutela_Anexos
² Folios 9 al 17 del PDF 02DemandaTutela_Anexos



DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ

Valledupar, Cesar, bajo el radicado No. 20001- 40-71-003-2019-00259-00, toda vez que decretó la nulidad de toda actuación al interior del proceso de convocatoria pública para elegir un representante principal y un representante suplente ante el Consejo Directivo de CORPOCESAR para el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2020 y 31 de diciembre de 2023 y ordenó que se realizara una nueva garantizando la participación de los consejos comunitarios que cumplan con los requisitos.

También, que en la providencia referida, el Juez constitucional estableció que con anterioridad mínima de quince (15) días a la fecha fijada para la reunión de elección se debían radicar la certificación expedida por el alcalde municipal correspondiente, en la que conste la ubicación del consejo comunitario, la inscripción de la Junta y de su representante legal y allegar original o copia del documento en el cual conste la designación del miembro de la comunidad postulado como candidato, debiendo omitirse, según él, el requisito establecido en el literal b) del artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, correspondiente a la certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción.

Que el 2 de agosto de 2023 la entidad accionada CORPOCESAR³ abrió convocatoria pública dirigida a todos los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras localizadas en el departamento del Cesar para participar en la elección del representante principal y suplente de ellas, de acuerdo con el artículo 56, de la ley 70 de 1993, ante el Consejo Directivo de CORPOCESAR, para el periodo 2023 - 2027, haciendo exigible aportar todos los requisitos, en especial la certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción.

³ Folio 40 del PDF 02DemandaTutela_Anexos



DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR

JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ

Refirió que en garantía de los derechos fundamentales invocados, la Corte Constitucional, en sentencia T - 576 de 2014, estableció que *“la participación de las comunidades negras en la elección de los integrantes del espacio nacional que las representarían para efectos de la consulta previa de las medidas de amplio alcance que pudieran afectarlas no podía supeditarse a que contaran con un título colectivo adjudicado por el Incoder ni a ningún criterio que limitara su derecho a autodeterminarse y a reivindicar, en ejercicio de su identidad diversa, su status como titulares de derechos étnicos”*. Así mismo, que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, el 17 de mayo de 2018 dejó claro que *“(…) no se puede exigir un título colectivo para el ejercicio de los derechos fundamentales de participación de los consejos comunitarios.”*

Además, que la Corte Constitucional en la sentencia T-681 de 2016, M.P. explicó que: *“5.1. La excepción de inconstitucionalidad se erige a partir del artículo 4° de la Constitución Política que establece que, cuando existen normas contrarias a la Constitución, se emplearan las medidas contenidas en la Carta Política debido a su superioridad jerárquica.”*. Así lo interpretó la misma Corporación en la sentencia T- 576 de 2014 que analizó la exigencia que hizo el ministerio del interior a las comunidades afrodescendientes, consistente en poseer un título colectivo de adjudicación para participar en la elección de los integrantes del Espacio Nacional de Delegados, en cuanto sostuvo que *“pretender que el derecho a la participación de las comunidades negras dependa de un título formal que, además, certifica una relación con la tierra, resulta a todas luces irrazonable, sobre todo, si se tiene en cuenta la manera en que las comunidades negras del país han sido despojadas de sus territorios y lo complejo que, en sí mismo, resulta el trámite de titulación colectiva...”*.

Consideró importante lo anterior porque ningún Consejo Comunitario en el Cesar tiene territorio colectivos, debido a que en todo el departamento hay alrededor de 100 Consejos Comunitarios de los cuales 12 tienen certificación del Ministerio, lo que significa que posiblemente estos tienen titulación en trámite que se puede verificar con un informe de la Agencia nacional de Tierras, lo que indica que solo una minoría representaría o tendría la posibilidad de tener voz y voto, por lo que derivado de dicha situación no se recogería el sentir de los Consejos Comunitarios del departamento del Cesar, máxime en este departamento que tiene *“varios espejos de agua, cenagosos y minería voraz que impacta el medio ambiente”*.



DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ

Por lo informado, solicitó que se amparen los derechos fundamentales invocados y se ordene a CORPOCESAR dejar sin efecto la convocatoria publicada el 2 de agosto de 2023, con el fin de elegir representante principal y suplente de las comunidades negras a que se refiere el artículo 56 de la ley 70 de 1993, ante el Consejo Directivo de CORPOCESAR para el periodo 2024 - 2027, eliminando el literal b) del artículo 2.2.8.5.1.2 del decreto 1076 de 2015.

Igualmente, se ordene a CORPOCESAR se genere una nueva convocatoria donde se incluyan todos los consejos comunitarios que tengan o no certificación de la Agencia Nacional de Tierras en trámite o adjudicada.

3. - ACTUACIÓN PROCESAL Y RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS

3.1. – En auto de 18 de agosto de 2023 este Juzgado admitió la acción de tutela contra la Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR” y Alcaldía Municipal de la Jagua de Ibirico, Cesar, dándoles traslado de la tutela para que se pronunciaran sobre ella. Además, se vinculó oficiosamente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Tierras.

3.2. – Dentro del término otorgado, la **Jefe de la Oficina Jurídica del Municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar**, informó que una vez revisado el libro de registro de Asociaciones, Organizaciones y Consejos Comunitarios y Cooperativas, evidenció que en condición de presidente y representante legal, el señor **JULIO ALBERTO DE LA HOZ FONTALVO** inscribió en el libro, el 29 de octubre de 2019, en la Secretaría de Gobierno de esa municipalidad, un Consejo Comunitario de Comunidades Negras Raizales y Palenqueras Afrocolombianas “SAN ISIDRO LABRADOR”, que pertenece al municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar.

Así mismo, que la Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR” goza de autonomía a la hora de realizar la apertura de dicha convocatoria, por lo que ese ente territorial



DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ

no hace parte de esta, ni en su selección, además, no es responsables de que cada consejo comunitario lleve consigo registro y requisitos esenciales para participar en la convocatoria.

Por lo anterior, solicitó que la alcaldía que representa sea desvinculada, dado que no ha amenazado los derechos fundamentales del accionante y se trata de asuntos ajenos a sus responsabilidades.

3.3. – El Apoderado de la Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR se refirió a cada uno de los hechos de la demanda y manifestó que es menester tener en cuenta que la acción de tutela tiene un carácter subsidiario y que para el caso concreto el accionante debe acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, teniendo incluso la posibilidad de solicitar medidas cautelares y utilizar los demás mecanismos procesales orientados a la satisfacción de sus intereses. También, que resulta improcedente la acción constitucional toda vez que no se está ante la presencia de un perjuicio irremediable y tampoco aportó ningún tipo de material probatorio que permita establecer con certeza y claridad la existencia de dicho perjuicio.

Así mismo, que las actuaciones de esa entidad, en el marco de la convocatoria pública en mención, no restringen de manera alguna la participación de los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras localizados en el departamento del Cesar, pues obedece a los principios orientadores en la medida que garantiza la libre concurrencia e igualdad en el ingreso al cerciorarse de que aquellos que deseen participar en la convocatoria acrediten los requisitos determinados en la misma.

En línea con lo anterior, CORPOCESAR atiende a lo consignado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, en su artículo 2.2.8.5.1.2.5, tan es así que diversas convocatorias públicas⁴ relativas a la participación de las Comunidades Negras en la participación de la elección de un representante principal y su respectivo suplente ante los Consejos Directivos las

⁴ Folios 93 al 105 del PDF 09ContestaciónCorpocesar_23Agosto2023



DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ

Corporaciones Autónomas Regionales de diversos departamentos exigen como requisito el aquí demandado por el accionante, pues precisamente éste es ordenado en cumplimiento al artículo 2.2.8.5.1.2. del precitado Decreto.

Además, que esa Corporación ha obrado con apego al marco normativo que regula la materia y a los principios orientadores de las convocatorias públicas, incluso ha coordinado con el señor José Armando Mendoza Sarmiento, en su condición de Consultivo del Nivel del Cesar de la Comisión de Alto Nivel de la Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, como representante del departamento del Cesar⁵ y da cuenta de ello el derecho de petición de 12 de julio de 2023⁶ interpuesto por el señor Mendoza Sarmiento, en el cual solicitó convocar únicamente a los Consejos Comunitarios que cumplan estrictamente con los requisitos establecidos en el artículo No. 2 del decreto 1523 de 2003.

Por lo anteriormente expuesto, solicitó que se declare improcedente el amparo de los derechos fundamentales invocados, en razón a que en lo que corresponde a las disposiciones tomadas y actuaciones ejecutadas por CORPOCESAR se circunscriben a: i) decisiones que se encuentran debidamente soportadas en las normas aplicables al caso, ii) no comportan una vulneración a derecho fundamental alguno, iii) no causan perjuicio irremediable que merezca ser objeto de protección por medio del presente amparo constitucional.

3.4. – La Apoderada Judicial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se opuso a la tutela de los derechos invocados por el accionante frente a esa Cartera, por cuanto esa entidad no ha dado lugar a la presunta vulneración de los derechos alegados y por ello constituye para su representada la falta de legitimación por pasiva, dado que la protección que se persigue la acción de tutela escapa de las competencias de ella.

Alegó que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es un órgano de gestión encargado de fijar las políticas ambientales a nivel nacional, para que estas sean ejecutadas

⁵ Folios 23-24 del PDF 09ContestaciónCorpocesar_23Agosto2023

⁶ Folios 25 al 29 del PDF 09ContestaciónCorpocesar_23Agosto2023



DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ

por las autoridades ambientales de acuerdo con el área de jurisdicción y sus respectivas competencias, tales como las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible, así mismo, desarrolló los objetivos y las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales conforme al artículo 31 de la ley 99 de 1993, resaltando que ese Ministerio no funge de ninguna manera como superior jerárquico de las autoridades ambientales, las cuales ejercen y cumplen sus funciones con autonomía.

Por todo lo expuesto, no es viable ni legal ni técnicamente exigir a esa entidad el cumplimiento de las funciones legales que no le fueron asignadas por ley e imputar responsabilidad por un hecho presuntamente atribuible a la Corporación Autónoma Regional del Cesar, o exigirle a esta cartera ministerial ordenar actuación alguna a la respectiva Corporación Autónoma Regional, toda vez que dichas funciones escaparían ampliamente de las potestades y facultades atribuidas a ese ente.

Así las cosas, solicitó que se desvincule al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.

3.5. – La Apoderada de la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras – ANT mencionó que de la lectura de la acción impetrada no se pudo inferir en qué consiste la vulneración a los derechos del actor por parte de esta entidad, ya que narra unos hechos relacionados con actuaciones ejecutadas presuntamente vulnerados por la Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR” y Alcaldía Municipal de la Jagua de Ibirico, Cesar.

Sin embargo, requirió a la Dirección de Asuntos Étnicos de la ANT, para que informara si a la fecha se encuentra adelantado alguna actuación administrativa respecto del Consejo Comunitario San Isidro Labrador del municipio de La Jagua de Ibirico – Cesar, obteniendo



DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ

como respuesta que revisados los archivos y aplicativos, a la fecha no encontraron petición alguna pendiente por dar respuesta al accionante.

Igualmente, solicitó la improcedencia de la acción de tutela y que se declare a favor de la Agencia Nacional de Tierras – ANT la falta de legitimación en la causa por pasiva por cuanto no existe nexo de causalidad entre la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora y la acción u omisión por parte de la Agencia Nacional de Tierras.

3.6. – El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior solicitó que se declare en favor de ese ministerio la falta de legitimación en la causa por pasiva, porque no existe un nexo de casualidad entre la presunta vulneración del derecho fundamental invocado y la acción u omisión por parte de ese ente, incluyendo la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y que en consecuencia se proceda a la desvinculación inmediata.

Destacó que en lo relativo al proceso de designación o elección del representante de las Comunidades Negras en las Corporaciones Autónomas Regionales, es conveniente tener como referente el artículo 56 de la Ley 70 de 1993, el cual dice: “Las Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción sobre las áreas donde se adjudiquen las propiedades colectivas a las comunidades negras de que trata el artículo transitorio 55 de la Constitución, tendrán un (1) representante de esas comunidades en sus consejos directivos en los términos que defina el reglamento que expida el Gobierno Nacional”. Así, el reglamento expedido por el Gobierno Nacional en la materia, dice que la manera que los miembros de las comunidades harán la elección de su representante y suplente ante los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales, conforme lo establece el Decreto 1076 de 2015.



DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ

4. - CONSIDERACIONES DEL JUZGADO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con el numeral 4º del artículo 1 del Decreto 333 de 2021, este Despacho es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el señor **JULIO ALBERTO DE LA HOZ FONTALVO**⁷.

Establecido lo anterior, lo primero que habrá de precisarse, es que la acción de tutela es un mecanismo que permite demandar ante los jueces, mediante un procedimiento preferencial y sumario, la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad o de los particulares encargados de la prestación de un servicio público o frente a los cuales el accionante se encuentre en condiciones de subordinación o indefensión.

Según el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia la acción de tutela “...sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

Dicho aparte de la norma Constitucional encuentra su desarrollo en el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que literalmente expresa: “La acción de tutela no procederá: 1) Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquellos se utilicen como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (...)”

Sobre este punto, la Corte Constitucional ha establecido reiteradamente⁸: “**El carácter subsidiario y residual de la acción de tutela** ha servido a la Corte Constitucional para explicar el ámbito restringido de procedencia de las peticiones elevadas con fundamento en

⁷ Folio 41 del PDF 02DemandaTutela_Anexos

⁸ Ver, entre otras, las siguientes providencias: S.V. [T-070/97](#), [T-167/05](#), [T-642/07](#), [T-807/07](#), A.V. [T-864/07](#), [T-213/08](#), [T-363/08](#), [T-404/08](#), [T-413/08](#), [T-421/08](#), [T-609/08](#), [T-773/08](#), [T-809/08](#), [T-297/09](#), [T-530/09](#), [T-598/09](#), [T-624/09](#), [T-632/09](#), [T-629/09](#)



DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ

el artículo 86 de la Carta Política, más aún cuando el sistema judicial permite a las partes valerse de diversas acciones ordinarias que pueden ser ejercidas ante las autoridades que integran la organización jurisdiccional, encaminadas todas a la defensa de sus derechos” (Sentencia T-629-2009).

La Corte también ha reconocido que la subsidiariedad implica la improcedencia del amparo cuando el actor no haya ejercitado la jurisdicción conforme a los mecanismos jurídicos de los que dispone, y los pretenda sustituir con la acción constitucional de tutela:

“La Corte ha sostenido y reiterado que la acción de tutela es improcedente (i) cuando a través de la misma se pretendan reemplazar los mecanismos judiciales ordinarios que hayan caducado o vencido y (ii) cuando mediante su ejercicio se pretenda reabrir un asunto litigioso que, por la negligencia, desidia e incuria del demandante, se encuentra debidamente resuelto a través de una sentencia ordinaria legalmente ejecutoriada”

(...) Sin duda alguna la naturaleza subsidiaria del amparo constitucional ante los diferentes mecanismos judiciales ordinarios dispuestos en nuestro Estado de Derecho ha sido resaltada y desarrollada en la jurisprudencia constitucional desde el primer año de vigencia de la Constitución Política de 1991⁹. En la sentencia T-007 de 1992, la Corte advirtió que de ninguna manera la acción de tutela puede constituirse en un ‘remedio’ para quienes interponen la acción ordinaria por fuera de término o -peor aún- para quienes -sin justificación- evitan acudir sistemáticamente a los mecanismos judiciales ordinarios. En dicho fallo se dijo textualmente lo que sigue: “Si, por el contrario, el titular de la acción ordinaria no hace uso de ella dentro del tiempo que la ley le otorga, no podrá esperar que el Estado despliegue su actividad jurisdiccional para ofrecerle la protección que necesita, pero su situación, entonces, no es imputable al Estado o a sus agentes, sino que obedece a su propia incuria, a su negligencia, al hecho de haberse abstenido de utilizar los medios de los cuales gozaba para su defensa. En tales situaciones, menos aún puede ser invocada la tutela, por cuanto no es ésta una institución establecida para revivir los términos de caducidad ni para subsanar los efectos del descuido en que haya podido incurrir el accionante” (Sentencia T-179 de 2009).

⁹ De hecho, en la sentencia T-001 de 1992 la Sala Tercera de Revisión de ese entonces previno lo siguiente: “(...) la acción de tutela no ha sido consagrada para provocar la iniciación de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opción de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el propósito claro y definido, estricto y específico, que el propio artículo 86 de la Constitución indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce”.



DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ

Para el caso en concreto, el señor **JULIO ALBERTO DE LA HOZ FONTALVO** en representación legal de Consejo Comunitario San Isidro Labrador del Municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar¹⁰, solicitó la protección de los derechos constitucionales al considerar que la exigencia del requisito establecido en el literal b) del artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076 de 2015 para que los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras localizados en el departamento del Cesar puedan participar en la convocatoria pública hecha por CORPOCESAR el 2 de agosto de 2023, para la elección de un (1) representante principal y suplente ante el Consejo Directivo de esa entidad para el periodo 2024 - 2027, pues bajo dicha exigencia no se recogería el sentir de los Consejos Comunitarios del departamento del Cesar, pues sólo la minoría representaría o tendría la posibilidad de tener voz y voto; así, pretende que en sede de tutela se le ordene a la accionada Corporación que deje sin efecto la convocatoria publicada el 2 de agosto de 2023 y genere una nueva donde se incluyan todos los Consejos Comunitarios que tengan o no certificación de la Agencia Nacional de Tierras en trámite o adjudicada.

Como se advirtió al inicio, la Corte Constitucional ha indicado pacíficamente que, sin excluir la posibilidad de acudir a la vía excepcional de la tutela para la protección de derechos fundamentales en estos casos presentó dos escenarios bajo los cuales se puede acudir a este mecanismo constitucional: i) cuando a pesar de existir un mecanismo idóneo, el mismo no goza de la suficiente efectividad, o ii) cuando se trata de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

Un perjuicio es irremediable, cuando: “(i) se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iii) su ocurrencia es inminente; (iv) resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y, (v) la gravedad de los hechos, es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales”¹¹.

¹⁰ Folio 41 del PDF 02DemandaTutela_Anexos

¹¹ Sentencia T-132 de 2006. Sobre los mismos requisitos se pueden consultar las sentencias T-629 de 2008 y T-1266 de 2008.



DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ

De acuerdo con lo anterior, el Despacho ha de advertir desde ahora que el amparo pretendido por el accionante resulta improcedente, en tanto que su pretensión apunta a que se deje sin efecto, parcialmente, un Acto Administrativo de carácter general y se ordene a un ente administrativo autónomo como lo es CORPOCESAR que genere una nueva convocatoria con el fin de elegir representante principal y suplente de las comunidades negras ante el Consejo Directivo de esa corporación, donde se incluyan todos los consejos comunitarios que tengan o no certificación de la agencia nacional de tierras en trámite o adjudicada, exigencia que debe ser sometida a la jurisdicción contencioso administrativa.

Sobre la naturaleza jurídica de las corporaciones autónomas regionales la Corte Constitucional en la sentencia C – 152 – 2023 M.P. Alejandro Linares Cantillo ha dicho lo siguiente:

“42. El artículo 23 de la ley 99 de 1993 precisa la naturaleza jurídica de las corporaciones autónomas regionales, al señalar que se trata de “entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del [MADS]”

También, el Consejo de Estado en auto de 19 de agosto de 2020 señaló sobre el control inmediato de legalidad de los actos proferidos por las Corporaciones Autónomas Regionales, lo siguiente:

“CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD / CRITERIO DE COMPETENCIA / ACTO ADMINISTRATIVO / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / ENTIDAD TERRITORIAL / APLICACIÓN DEL FACTOR DE COMPETENCIA TERRITORIAL / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / AUTORIDAD PÚBLICA DEL ORDEN NACIONAL / DECISIÓN ADMINISTRATIVA



DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR

JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ

Para definir a quién corresponde el conocimiento de los actos proferidos por las Corporaciones Autónomas Regionales en el marco del control inmediato de legalidad, se impone armonizar los criterios legales que definen las competencias entre los Tribunales Administrativos -art. 151.14 del CPACA- y el Consejo de Estado -art. 136 ibídem- en relación con ese medio de control, de donde emergen dos premisas centrales en la definición de la competencia: i) si el acto emana de entidades territoriales, el competente será el tribunal administrativo del lugar donde fue expedido el acto, pues la regla procesal se acompasa con la jurisdicción donde éste proyecta sus efectos y ii) cuando se trate de actos que no se inscriben en un ámbito territorial definido, se entiende que provienen de una autoridad del orden nacional y, en estos casos, el control judicial estará a cargo del Consejo de Estado.

CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD / CRITERIO DE COMPETENCIA / FACTOR DE COMPETENCIA / ACTO ADMINISTRATIVO / CRITERIO MATERIAL / CRITERIO FORMAL / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – Lugar de expedición / ENTIDAD TERRITORIAL / ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO / APLICACIÓN DEL FACTOR DE COMPETENCIA TERRITORIAL / AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / AUTORIDAD PÚBLICA DEL ORDEN NACIONAL / EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVA

El factor de competencia de este medio de control, recibe las notas distintivas del criterio material y formal de los actos administrativos, de manera que el lugar de expedición del acto se corresponde con el nivel que ocupa la respectiva entidad en la estructura del Estado, ya sea en el orden territorial o en el nacional; al paso que dichos actos, materialmente, sólo producen decisiones con efectos jurídicos en el ámbito de la jurisdicción donde la entidad pública que lo emite ejerza sus competencias, ya sea en la esfera local o nacional, completando de esta manera un silogismo basado en la plena coincidencia de estos factores y criterios, a partir del cual la determinación del juez competente no debería revestir mayor discusión.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL / NATURALEZA JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL - Autoridades sui generis / ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL - No hacen parte de la organización territorial del Estado / FACULTADES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL ...

Las Corporaciones Autónomas Regionales, (...) en su acción administrativa, no encajan en los niveles tradicionales de la organización territorial -local o nacional-, pues dada su especial naturaleza, estructura y finalidades, corresponden a autoridades sui generis, “sin que sea posible encuadrarlas como otro organismo superior de la administración central (ministerios, departamentos administrativos, etc.), o descentralizado de este mismo orden, ni como una entidad territorial”, siendo entonces consideradas como eslabones intermedios entre la Nación y las entidades locales (departamentales y municipales), sin perder por ello la jurisdicción en el territorio que por ley les ha sido atribuida. (...) la especial connotación que tienen las Corporaciones Autónomas Regionales en la estructura del Estado Colombiano permite afirmar que “por su estructura y finalidades, corresponden a formas u organismos administrativos, reconocidos por la Constitución Política, orientados a la gestión de los recursos naturales y del medio ambiente, que responden a un criterio de



DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ

organización funcional para la gestión de ecosistemas comunes, cuyas atribuciones se aplican a un espacio territorial plenamente identificado. Esta noción, supera los niveles fijados en la división política del territorio, pues las CAR tienen su propia jurisdicción de orden estrictamente funcional, de la que emerge su carácter autónomo y especial”

CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD / CRITERIO DE COMPETENCIA / FACTOR DE COMPETENCIA / ACTO ADMINISTRATIVO / CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL / APLICACIÓN DEL FACTOR DE COMPETENCIA TERRITORIAL / AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – Lugar de expedición

Es posible, para efectos del control inmediato de legalidad, aplicar a los actos que expidan las Corporaciones Autónomas Regionales la regla de competencia prevista en el artículo 136 del CPACA, que corresponde al lugar de expedición de los actos, sin que sea necesario ubicar a tales organismos en el orden local o nacional, de cara a la suficiencia de una regla aplicable al factor de competencia que, además, concuerda con el ámbito en que se proyectan tales decisiones y se ciñe a la jurisdicción fijada en la Ley 99 de 1993.”

De igual forma, el Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 26 de mayo de 2022, Rad. 11001- 03-28-000-2021-00063-00, sobre el procedimiento para la elección de los representantes de las Comunidades negras ante los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales, expresó lo siguiente:

“La Ley 70 de 1993 consagró en su artículo 56 que “Las Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción sobre las áreas donde se adjudiquen las propiedades colectivas a las comunidades negras de que trata el artículo transitorio 55 de la Constitución, tendrán un (1) representante de esas comunidades en sus consejos directivos en los términos que defina el reglamento que expida el Gobierno Nacional.”

Dicho reglamento se concretó a través del Decreto 1523 de 2003, cuyas fases y etapas se compilaron en el capítulo 5° del Decreto 1076 de 2015.

La forma de la convocatoria se reglamentó de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 2.2.8.5.1.1. Convocatoria. Para la elección del representante y suplente de las comunidades negras a que se refiere el artículo 56 de la Ley 70 de 1993, ante el Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales, el Director General de la respectiva Corporación formulará invitación pública a los respectivos Consejos Comunitarios, en la cual se indicarán los requisitos para participar en la elección, así como el lugar, fecha y hora para la celebración de la



DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ

reunión en la cual se hará la elección. La convocatoria se publicará en una sola oportunidad en un diario de amplia circulación regional o nacional con treinta (30) días de anterioridad a la fecha de realización de la elección, y se difundirá por una sola vez por medio radial o televisivo.”

En lo relacionado con los requisitos de los consejos comunitarios interesados en participar en la elección y postular candidatos, se establecieron los siguientes:

“ARTÍCULO 2.2.8.5.1.2. Requisitos. Los Consejos Comunitarios que aspiren a participar en la elección del representante y suplente, ante el Consejo Directivo, allegarán a la Corporación Autónoma Regional respectiva, con anterioridad mínima de quince (15) días a la fecha de la elección, los siguientes documentos: a) Certificación expedida por el alcalde municipal correspondiente, en la que conste la ubicación del Consejo Comunitario, la inscripción de la Junta y de su representante legal; b) Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción; c) Allegar original o copia del documento en el cual conste la designación del miembro de la comunidad postulado como candidato.”

Posterior a las postulaciones, la Corporación procede a la revisión de los documentos para acreditar los referidos requisitos, que comprende la elaboración de un informe que se presenta el día de la reunión de la elección:

“ARTÍCULO 2.2.8.5.1.3. Revisión de la documentación. La Corporación Autónoma Regional revisará los documentos presentados y verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos. Posteriormente, elaborará un informe al respecto, el cual será presentado el día de la reunión de elección.”

Conviene poner de presente el procedimiento para llevar a cabo la reunión de elección, de la cual es pertinente destacar que la misma se realiza con los representantes legales de los consejos comunitarios quienes tienen a su cargo establecer la forma de elección de su representante principal y su suplente.”

En la sentencia antes citada, también se pronunció sobre el requisito del literal b) establecido en el artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076 de 2015, de la siguiente forma:



DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ

*“... Como bien se observa, la Sección consideró que para el cumplimiento del requisito del literal b) del artículo 2.2.8.5.1.2. del Decreto 1076 de 2015, **bastaba con haber radicado la solicitud de titulación colectiva ante la Agencia Nacional de Tierras**¹², por lo que las comunidades que acreditaron tal circunstancia, aún con el hecho de no contar con una admisión formal del trámite, sí estaban habilitadas para participar en el proceso de elección y, por ende, no se les debió excluir de este.”*

De acuerdo a los anteriores parámetros, lo primero que el Juzgado concluye es que si la parte accionante considera que la exigencia del literal b), del artículo 2.2.8.5.1.2, del Decreto 1076 de 2015, para que los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras localizados en el departamento del Cesar puedan participar en la convocatoria pública de CORPOCESAR, aplicada por esa entidad el pasado 2 de agosto de 2023, referida a la elección de un (1) representante principal y suplente ante el consejo directivo de CORPOCESAR para el periodo 2024 - 2027, lo correspondiente es que acuda ante la jurisdicción contenciosa administrativa, incluso, pudiendo solicitar como medida cautelar la suspensión provisional del acto administrativo que hizo la convocatoria.

Por tanto, resulta improcedente que para dejar sin efecto un acto administrativo de carácter general y se ordene a un ente administrativo autónomo como lo es CORPOCESAR a que genere una nueva convocatoria con el fin de elegir representante principal y suplente de las comunidades negras ante el Consejo Directivo de esa Corporación donde se incluyan todos los Consejos Comunitarios que tengan o no certificación de la Agencia Nacional de Tierras en trámite o adjudicada, se acuda a la acción de tutela cuando el legislador tiene instituido mecanismos a partir del cual se genera alternativas judiciales de reclamación, que son las llamadas a utilizarse preferentemente, salvo que se esté frente a la posible configuración de un perjuicio irremediable, que de alguna manera justifique la intervención de la jurisdicción constitucional, lo cual no aparece acreditado dentro de la presente tramitación, pues como se observó en su demanda el accionante no mencionó nada al respecto que siquiera suponga una amenaza a los derechos fundamentales invocados, como tampoco aportó una prueba sumaria que demostrara que las exigencias de los requisitos para que el Consejo Comunitario que representa participe en la convocatoria pública convocada por CORPOCESAR el 2 de

¹² Resaltado por el Despacho



DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ

agosto de 2023 son contrarias a lo exigido por la normatividad vigente y hayan sido una vía de hecho de dicha entidad.

Además, observó el Despacho que la convocatoria pública invocada por CORPOCESAR el 2 de agosto de 2023 fue dirigida a todas las Comunidades Negras domiciliadas en todo el territorio del departamento del Cesar para que participaran en la elección de un (1) representante miembro principal y suplente ante el Consejo Directivo de dicha Corporación para el periodo 2024 - 2017 y en la misma se informó a los Consejos Comunitarios que aspirarían a participar que allegaran a dicha corporación con anterioridad de 15 días a la fecha establecida para la elección los requisitos previstos en el artículo 2.2.8.5.1.2 del decreto 1076 de 2015 incluyendo el del literal b) que se refiere a la *certificación expedida por el INCODER, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción*¹³, otorgándoles como plazo para la presentación de los documentos los días hábiles comprendidos entre el 2 de agosto de 2023 hasta el 25 de agosto de 2023.

No obstante, el accionante presentó acción de tutela 18 de agosto de 2023, es decir, dentro del término otorgado por la Corporación Autónoma Regional del Cesar para que se allegaron los documentos requeridos, sin haber al menos intentado ante la Agencia Nacional de Tierras - ANT la solicitud correspondiente con el fin de obtener la certificación que acreditara que está en trámite la adjudicación a la comunidad negra que representa, pues, en la respuesta dada por la ANT dentro del presente trámite constitucional, informaron que requirieron a la Dirección de Asuntos Étnicos de esa entidad para que informara si a la fecha se encuentra adelantado alguna actuación administrativa respecto del Consejo Comunitario San Isidro Labrador del municipio de La Jagua de Ibirico – Cesar; a lo que respondió que revisados los archivos y aplicativos, a la fecha no encontraron petición alguna pendiente por dar respuesta al accionante, lo que refuerza la tesis de que el actor no agotó todos los mecanismos jurídicos que dispone para lograr lo que pretende mediante la presente acción de tutela.

¹³ Resaltado por el Despacho



**DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ**

Por consiguiente, sin haber agotado los medios ordinarios judiciales con que cuenta para controvertir la decisión de la entidad que considera trasgresora de sus derechos fundamentales, no resulta procedente la acción de tutela como mecanismo extraordinario de protección, por lo que se reitera, se declarará improcedente el amparo reclamado.

Con fundamento en las aludidas consideraciones, el **JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANÁ - CESAR**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución Política y la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Declarar improcedente la tutela solicitada por el señor **JULIO ALBERTO DE LA HOZ FONTALVO**, conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: Notificar la decisión a las partes conforme a los lineamientos del decreto 2591 de 1991, haciéndoles saber que respecto de esta procede impugnación.

TERCERO: En el caso que la presente sentencia no sea impugnada, remítase la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo 31 del decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS GIOVANNY TAPIAS URREGO

JUEZ